

# Formoso achaca los incendios forestales a la despoblación del rural y el cambio climático

El presidente de la Diputación de A Coruña advierte de que “no puede ser” que en Galicia haya una superficie “abandonada” tan grande e insta a tomar “medidas contundentes”

REDACCIÓN  
A CORUÑA

La despoblación del rural y el cambio climático son factores clave sobre los que se deben trabajar para atajar una de las lacras de los montes gallegos: los incendios forestales. Así lo advirtió ayer el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, durante su intervención en el foro *La lacra de los incendios forestales* celebrado ayer en Culleredo.

En el evento, organizado por la corporación provincial junto con Next Educación y la European Climate Foundation, Formoso ha valorado como “dramática” la cifra de incendios del verano pasado —con más de 46.000 hectáreas quemadas— e hizo un llamamiento a “dejar de hablar con una terminología vacía sobre los incendios”. “El reto demográfico y la despoblación del rural están en todos los programas electorales y en cualquier político, pero aterrizar esa terminología y esa preocupación es francamente difícil si no se está dispuesto a revolucionar su propio país”, defendió el también líder del PSdeG durante el acto conducido por el periodista Manuel Campo Vidal, director de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación.

Según advirtió Formoso, “no puede ser” que en Galicia haya una su-



El presidente de la Diputación de A Coruña, ayer en su intervención en Culleredo. // L. O.

perficie “abandonada tan grande en un país tan productivo donde tanto talento, tanta juventud que emigra de Galicia, podría no hacerlo si este país fuese más productivo”.

El presidente provincial volvió a poner encima de la mesa “medidas contundentes” como las relacionadas con la política fiscal, entendiendo que “un impuesto de sociedades tiene que tener algún tipo de bonificación para aquel que apuesta de verdad por el rural”, o con las licita-

ciones públicas “en las que las administraciones deben primar con algún criterio aquella empresa adjudicataria del servicio que decida prestarlo desde el ámbito rural”.

“Tenemos que pasar de las palabras a los hechos”, reivindicó Formoso que recordó que “la Diputación viene de poner en marcha en A Capela la única oficina que hay en toda Galicia para apoyar a los concejales en la gestión de fondos europeos”. “Lo lógico es que estuviera en

A Coruña, cerca de la Diputación, pero está en una villa de 1.300 habitantes que se llama A Capela, y es una decisión política”, defendió.

Los incendios —dijo— “se resolverán cuando se vuelva a producir en el rural, cuando la gente vuelva a vivir en el rural”. “Si no lo hacemos, pasaremos a gastar el doble en extinción, seguiremos perdiendo población, el sector primario seguirá perdiendo explotaciones y el rural seguirá desfalleciendo”, concluyó.

Los embalses ya tienen una ocupación del 55%, un nivel mayor que hace un año

REDACCIÓN  
A CORUÑA

Las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas en Galicia han aliviado las reservas hidráulicas después de que se hubiesen alcanzado situaciones de pre-alerta por sequía y restricciones en el grifo durante la época estival. Actualmente, las cuencas gallegas tienen más agua embalsada que hace un año y rozan la media de la última década.

Según los datos del boletín hidrológico que publica cada semana el Ministerio para la Transición Ecológica, Galicia tiene acumula 2.061 hectómetros cúbicos, lo que supone el 55,5% de toda su capacidad.

En el caso de la cuenca Galicia Costa (gestionada por la Xunta), el porcentaje se eleva al 64,3%, al contar con 440 hectómetros embalsados, frente a los 684 de capacidad de la que dispone y los 309 del año anterior. De media en los últimos diez años, se alcanzaron los 438 hectómetros cúbicos.

Mientras, la cuenca del Miño-Sil está algo por debajo del 55%, un 53,5%. Tiene embalsados 1.621 de los 3.030 hectómetros cúbicos que puede almacenar, frente a los 1.398 del año pasado y los 1.638 de media de la última década.

del dato más alto desde 2016. En términos absolutos, ese 13,1% suponen 353.000 ciudadanos, 93.754 más que solo un año antes.

Por hogares, el porcentaje alcanza el 13,8% frente al 9,8% de 2020, lo que supone 150.674 familias frente a 107.000.

A las ayudas estatales del bono social se unen las autonómicas, que el pasado abril alcanzaron a 66.400 gallegos, que percibieron entre 228 y 473 euros para abonar el recibo eléctrico, en función de si la familia es considerada vulnerable o muy vulnerable y de la zona climática de la comunidad gallega donde se resida.

## Estudio de Comillas

El porcentaje de pobreza energética obtenido a partir de los datos del INE es similar al reciente estudio Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2021, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. La comunidad gallega presenta un gasto energético desproporcionado en el 15% de hogares, entendido este como un desembolso “excesivo que le obliga a prescindir de otros elementos básicos de la cesta de necesidades”.

## La pandemia aumentó en 94.000 personas la pobreza energética, el máximo en seis años

Más de 353.000 personas en Galicia no podían mantener su hogar a una “temperatura adecuada” antes de que estallase la crisis energética de este año



Un hombre acciona el interruptor de la luz. // A- Ortega / Europa Press

DANIEL DOMÍNGUEZ  
SANTIAGO

La guerra de Ucrania causada por la invasión rusa a comienzos de año disparó el precio de la energía y alimentó la crisis inflacionista hasta situarla en el punto más alto en cuatro décadas. Más de 353.000 gallegos afrontaron esta situación en riesgo de pobreza energética, casi 93.800 más que antes de la pandemia de COVID que en el año 2020 paralizó la economía mundial durante meses.

La Asociación de Ciencias Ambientales define la pobreza energética como “la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”. Uno de los principales indicadores que permiten calibrar el impacto de esta precariedad sobre la ciudadanía es la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge en un apartado específico la cifra de personas y familias que son incapaces de mantener su vivienda a “una tempera-

tura adecuada”, bien porque residen en un piso con un deficiente aislamiento, bien porque carecen de recursos económicos suficientes para pagar el recibo de la luz o

el gas y optan por no encender radiadores o calefacción.

Galicia registró el año pasado la cifra más alta de este tipo de pobreza energética, con un 13,1% de sus

ciudadanos sin capacidad para tener su vivienda a una temperatura adecuada, el doble que antes de la pandemia y más de tres puntos por encima del 9,6% de 2020. Se trata